

Talca, doce de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En causa RIT N°88-2023 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, el Defensor Penal Público don Sebastián Carrazana Gálvez, en representación de la sentenciada Carolina Andrea Ávila Gutiérrez, dedujo recurso de nulidad en contra del fallo definitivo pronunciado en dicha causa el día 7 de octubre de 2023, que condenó a su defendida en calidad de autora del delito de homicidio calificado, a cumplir la pena de 14 años de presidio mayor en grado medio, perpetrado el 13 de febrero del año 2022 en contra de Leopoldo Ulises Valenzuela López. Al efecto, adujo la causal de nulidad establecida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) del mismo código. En subsidio, interpuso la del artículo 373 letra b), del Código Procesal Penal, por infracción de ley, específicamente de los artículos 63 y 391 N°2 del Código Penal. Concluyó solicitando que lo acoja dicho recurso, se declare que se hace lugar al motivo de nulidad del artículo 374 letra e) y que en definitiva se anula tanto la sentencia como el juicio oral, disponiendo se remitan los antecedentes ante tribunal no inhabilitado con el objeto que procedan a la realización de un nuevo juicio y la dictación de una nueva sentencia. En subsidio lo anterior, para el evento que se descarte la causal principal, se declare que se hace lugar a la causal de nulidad del artículo 373 letra B, por haberse cometido un error de derecho que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por haber aplicado una pena superior a la que legalmente correspondiere; se declare en definitiva la nulidad del fallo y, de conformidad al artículo 385 del Código Procesal Penal, se dicte sin nueva audiencia pero separadamente sentencia de reemplazo, en que conforme a los motivos que indica, concurriendo circunstancias modificatorias que atenúan la responsabilidad penal de la acusada, a saber los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, se le imponga a doña CAROLINA ÁVILA ADASME la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo y accesorias legales, por su responsabilidad en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple.

Por resolución de 27 de diciembre de 2023, se declaró admisible el recurso y se procedió a su vista el día 3 de enero en curso.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en lo que concierne a la causal de nulidad impetrada de manera principal, prevista en el artículo 374 letra e), del Código procesal Penal, expuso que en el ejercicio de valoración de la prueba rendida se señaló que *“en el caso que nos convocó no se pudo demostrar los términos, fecha, forma y lugar en que se produjo el contacto inicial entre los acusados”*; luego se relata las supuestas actividades previa al hecho luctuoso, para reconocer que son meros indicios.



Expresa que para llegar a la decisión condenatoria respecto de su representada, a quien se sindicó como la tercera que actuó en calidad de mandante del crimen, se basó en algunos medios de prueba que detalla en el considerando undécimo del fallo y que resume en los siguientes: 1.- Declaración tomada en sede policial a María José Maldonado Maldonado, que no fue ratificada en el mismo juicio oral; 2.- La titularidad de los terrenos de la víctima, quien en definitiva solo tenía el derecho real de usufructo; 3.- Actos jurídicos celebrados respecto de la nuda propiedad de Carolina Ávila Adasme; 4.- Con los contratos reseñados se tiene por pagadas las sumas de dineros y se concluye que: *“es dable concluir que ésta disponía de recursos para comprometer el pago de una cantidad de dinero por la muerte de su padrino. El efectivo pago de dineros o una parte de él, luego se confirmó con la circunstancia de haberse encontrado en poder de los encausados Robertson y Marabolí, las sumas de \$1.000.000.- y \$140.000.- respectivamente”*, añadiendo que la testigo Maldonado Maldonado habría visto una mochila con dinero, pero esta no declaró; 5.-Declaración del acusado Robertson ante el Juez de Garantía de Talca; 6.- Declaración del acusado Marabolí ante la fiscal.

Los sentenciadores califican que el móvil para dar muerte a la víctima era meramente económico, atendido que éste representaba un obstáculo para los intereses económicos de la encausada, a fin de concretar la plena propiedad.

Hace presente que en virtud de esos conceptos el Tribunal Oral da por acreditados algunos hechos que simplemente no fueron objeto de prueba alguna; además, los infiere sin que existan antecedentes mínimamente suficientes para reproducir la línea argumental a la que llegó el Tribunal.

Así el tribunal dio por acreditado que ÁVILA ADASME contactó a ROBERTSON EARL Y MARABOLÍ GUTIÉRREZ; que le ofreció el pago de una “cierta cantidad de dinero”; que la oferta fue aceptada y se consumó con dar muerte a la víctima. Sin embargo, cuando se analizan los medios de prueba entregados en el juicio se descubre que simplemente no hay un nexo lógico, menos necesario, entre los antecedentes vertidos en el juicio y las conclusiones a las que arriba el tribunal. Huelga decir que no hubo ninguna prueba directa de las conclusiones del Tribunal Oral, reconociendo en el mismo fallo que existe prueba indirecta o indiciaria. Sin embargo, lo que es más grave, tampoco hubo premisas lógicas que permitan llegar a la conclusión supuestamente ineludible a la que se llegó, puesto que de la simple lectura no se puede establecer si existió la promesa y se concretó el pago prometido.

Manifiesta que tal es la orfandad probatoria que el Tribunal simplemente prescinde de una exposición mínimamente detallada de cómo llega a sus



conclusiones y se dedica más bien a tratar de descartar las explicaciones alternativas que daba la defensa. Lo anterior, casi en el límite de invertir la carga de la prueba. Tanto es así que no se hace cargo de la declaración prestada en juicio oral por la acusada Ávila Adasme y Marabolí Gutiérrez quienes desconocieron la oferta delictiva y un móvil totalmente diverso.

De esta manera, sostiene que el fallo no cumple lo ordenado por el artículo 297 del Código Procesal penal en su parte final y, por lo mismo, no cumple con lo dispuesto por la letra c) del artículo 342, originado que concurra el motivo de nulidad del artículo 374 letra E; lo que no permite conocer cuál fue el razonamiento del Tribunal para llegar a sus conclusiones respecto de la participación que le cabe a Ávila Adasme y la calificación jurídica que se da a los hechos en cuanto a la existencia de la circunstancia segunda del artículo 391 del Código Penal.

SEGUNDO: Que, en lo que respecta la causal deducida en subsidio de la anterior, esto es, la consagrada en el artículo 373 letra b), afirma que se sustenta en que la sentencia fue dictada con infracción de ley, específicamente los artículos 63 y 391 N°2 del Código Penal.

Indicó que su representada fue condenada como autor de homicidio calificado, bajo la figura del artículo 15 N° 2 del Código Penal, por estimar que cae en el caso de aquellos autores que “inducen directamente” la comisión del delito a otro. Añade que este tipo de autores son en realidad partícipes, conocidos por la doctrina bajo la figura de “instigadores”, quienes, por su especial relevancia en la comisión del delito, son considerados autores por nuestro legislador. En el caso concreto, Tribunal consideró que ÁVILA ADASME era instigadora del delito de homicidio calificado y usó como calificante la segunda del artículo 391 del Código Penal.

En cuanto a la calificante segunda, esto es, actuar “Por premio o promesa remuneratoria”, parte importante de la doctrina ha entendido que la misma redacción de la norma hace que sólo pueda aplicarse al autor ejecutor (comúnmente llamado sicario), sin que su alcance llegue al instigador. Añade que, en el caso concreto, el premio o promesa es derechamente la forma a través de la cual se ha desarrollado (según establece el tribunal) la instigación.

Siguiendo el razonamiento de la condena, a la señora CAROLINA ÁVILA ADASME es autor del 15 N° 2 porque ofrece una cierta suma de dinero a cambio del homicidio. Por lo tanto, el premio o promesa remuneratoria es en este caso inherente al delito y sin él no puede cometerse.

Aduce que al usar el hecho de la oferta pecuniaria para fundar la participación de su defendida y, luego, nuevamente, para fundar una mayor gravedad del mismo, lo que ha hecho el Tribunal es valorar dos veces la misma



conducta, primero para fundar la responsabilidad y luego para agravar la pena. Se trata de una infracción al principio NON BIS IN IDEM, principio plenamente reconocido por nuestro derecho y expresamente establecido en el artículo 63 inciso segundo del Código Penal, que dispone que no producen el efecto de aumentar la pena “aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse”.

Si bien la norma habla de circunstancias agravantes, atendida la naturaleza del tema que nos ocupa, claramente se aplica a las calificantes del artículo 391; de hecho, dada la mayor gravedad de las calificantes, es incluso más necesario el límite legal ya referido.

Afirma que el Tribunal Oral en lo Penal de Talca no ha dado aplicación al artículo 63 inciso segundo del Código Penal; al condenar a su defendida como autora de homicidio calificado cuando, en circunstancias que al tener convicción de condena, debió condenarla como autora de homicidio simple del artículo 391 inciso final del Código Penal.

TERCERO: Que, el recurso de nulidad previsto en nuestro ordenamiento procesal penal es de derecho estricto, esto es, sólo procede contra determinadas resoluciones judiciales y en virtud de causales taxativas previstas por el legislador, lo que importa que las resoluciones judiciales objeto del mismo, no pueden ser objeto de revisión de todas las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas ante el tribunal a quo sino sólo de aquellas constitutivas de las causales fundantes, del aludido medio de impugnación.

En cuanto a la causal de nulidad invocada de manera principal, esto es, la contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, cabe señalar que, para decidir si se acoge o rechaza un recurso de nulidad que se funda en ésta, debe analizarse si la sentencia impugnada adolece o no de la concurrencia de dos órdenes de requisitos: a) la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y b) la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del aludido cuerpo legal, esto es, con el estándar probatorio previsto en sede penal, cual es el sistema de la sana crítica, con las limitaciones impuestas relativas a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, elementos que, a su vez, deben ser desarrollados en cada caso en particular para quedar en condiciones de analizar los términos de su procedencia.

De esta forma, el recurso de nulidad implica que los hechos establecidos por el tribunal y la valoración de los medios de probatorios en que funda su convicción, son inamovibles en esta sede jurisdiccional, por cuanto el control que ejerce la Corte dice relación con la legalidad y no como “juez de mérito”; lo



revisable es la estructura racional del juicio o discurso valorativo desde la perspectiva de la lógica, máximas de la experiencia y conocimiento científicos.

CUARTO: Que, en la especie, de la lectura de los fundamentos noveno y décimo de la sentencia recurrida, se aprecia que el tribunal analizó cada uno de los elementos de prueba presentados a juicio, de manera armónica y coherente, lo que permitió despejar la duda razonable y tener por acreditado el hecho punible y la participación que le cupo a la acusada en el mismo, especificando, en este último aspecto, el análisis de los elementos de prueba que permitieron arribar a esa convicción.

Así, analizó las versiones dadas por los testigos de cargo y demás elementos de prueba; además, tuvo en cuenta tales probanzas al hacerse cargo de la prueba producida por la defensa y de sus alegaciones, que analizó de manera razonada, desestimando la versión de la acusada.

En efecto, de la lectura del considerando décimo se advierte claramente los motivos que tuvo el tribunal para considerar como suficiente la prueba de cargo rendida, para acreditar la participación de la enjuiciada Ávila Adasme, al señalar lo siguiente:

“En este orden de ideas, si bien en el caso que nos convocó no se pudo demostrar los términos, fecha, forma y lugar en que se produjo el contacto inicial entre los acusados; sabemos que dos ellos, los acusados Robertson Earl y Marabolí Gutiérrez, se reunieron horas previas al hecho saliendo en el vehículo Chevorlet Spark PPU FCGH-66, de propiedad del primero, desde la Villa Francia de Maule en dirección a San Clemente; que previo a iniciar el viaje se consiguen dinero para la bencina, cuestión que hicieron dado que en el trayecto cargaron \$3.000 de combustible en un Servicentro Shell; luego se encuentran en la aludida comuna con la acusada Carolina Ávila; una vez juntos, los tres se dirigen en la camioneta comprada días previos por aquélla, correspondiente a una Mazda BT-50 PPU HHHV-20, en la que se dirigen hasta local “Exquisito”, donde almuerzan, siendo cerca de las 13:00 horas.

Seguidamente, cerca de las 15:30 horas, se dirigen en la camioneta antes indicada hasta el inmueble del ofendido, se estacionan en sus cercanías; y los acusados, premunidos de un cuchillo cocinero y vestidos con overoles naranja y azul, ingresan hasta la cocina de la casa de la víctima, donde éste se encontraba y lo acometen, efectuándole cortes en distintas zonas del tórax y el cuello.



Que hecho lo anterior, regresan a la camioneta en la que los esperaba la enjuiciada, en la que huyen del lugar.

Luego, en horas de la tarde del mismo día de los hechos, se observa el vehículo del acusado John Robertson junto a otro sujeto, cargando \$20.000.- de combustible en un servicentro de Talca y, casi una hora después, se le observa comprando carnes en un supermercado a Cuenta ubicado en el sector sur de esta ciudad, para luego compartir un asado en su domicilio, en el que participa aquél y su pareja, María José Maldonado; Erasmo Marabolí y su pareja de nombre Berta. En dicha ocasión, los primeros pudieron ver que Marabolí portaba una mochila, en la que mantenía una suma indeterminada de billetes de \$20.000.- de los cuales toma algunos y se los entrega a su compañera.

Asimismo, en la mañana siguiente; en la diligencia de entrada y registro de la vivienda de John Robertson, se ubicó el vehículo Chevrolet Spark en el que se trasladaron hasta San Clemente, en el que se encuentran 50 billetes de \$20.000.- escondidos junto a la rueda de repuesto.

Los indicios antes reseñados, por un lado, y el dinero habido en poder de los encartados, del que dan cuenta los certificados de depósito en Banco Estado por \$140.000 y \$1.000.000.-, ratifican de alguna forma los dichos de la testigo María José Maldonado Maldonado; quien expuso al personal policial que su pareja –John Robertson Earl– fue contactado por una mujer de San Clemente de nombre Andrea, quien le ofreció el pago de \$25.000.000.- por darle muerte a su padrino, ya que tenía tierras y las que cuando falleciera iban a quedar a su nombre.

Que sobre los terrenos de propiedad de la víctima Ulises Valenzuela López, padrino de la acusada Carolina Ávila, se demostró que correspondían al Lote 5 de la parcela N°148 de Mariposas, el que tenía inicialmente una cabida de 8,10 hectáreas. De dicho inmueble, la referida encausada adquirió la nuda propiedad, por compra que le hiciera a la víctima por la suma de \$8.000.000.-, venta que se realizó en el año 2018. El usufructo vitalicio que mantenía el ofendido sobre el inmueble antes singularizado, se constata del certificado de gravámenes e hipotecas, emitido con fecha 23 de marzo de 2023, por la Conservadora de Bienes Raíces de Talca.



Ahora bien, las tratativas relativas a las enajenaciones de parte del terreno de ofendido, se demostraron con los tres contratos de promesa de compraventa, suscritos entre la acusada Carolina Andrea Ávila Adasme como “promitente vendedor” y Carol Andrea Garrido Basoalto, como “promitente comprador”, con fecha 29 de enero de 2021, 30 de abril de 2021 y 30 de agosto de 2021; en ellos se pacta la división del terreno en distintos lotes, pactándose por ellos diferentes precios y modalidades de pago; entre ellos, la suma de \$40.000.000.- de los cuales se abonaron en el acto de la firma del contrato, \$5.000.000.- y su saldo de \$35.000.000.- se pagó en el mes de febrero de 2022. Con dicho importe, la encartada adquirió en la suma de \$16.500.000.- la camioneta marca Mazda BT 50 PPU HHHV-20; compró un refrigerador y un juego de baño para el ofendido, quedándose para sí con el dinero restante.

Que en consecuencia, habiéndose demostrado la recepción de una importante cantidad de dinero por parte de la encausada Ávila Adasme; es dable concluir que ésta disponía de recursos para comprometer el pago de una cantidad de dinero por la muerte de su padrino. El efectivo pago de dineros o una parte de él, luego se confirmó con la circunstancia de haberse encontrado en poder de los encausados Robertson y Marabolí, las sumas de \$1.000.000.- y \$140.000.- respectivamente; este último además, fue visto horas después del hecho, portando una mochila con billetes en su interior –más de un millón de pesos según dijo María José Maldonado al personal policial– de los cuales sacó varios y se los entregó a su pareja de nombre Berta mientras compartían un asado en la casa de su coimputado.

Que reafirma la circunstancia antes descrita, el hecho de que los enjuiciados, previo a dirigirse a San Clemente para concretar el delito, no disponían de recursos –según lo refirió el sentenciado Marabolí Gutiérrez– por lo que tuvieron que conseguirse dinero para cargar combustible; antecedente este último que se confirma con el hecho de que sólo logran cargar \$3.000.- en bencina en su trayecto a San Clemente, en una estación de servicios Shell.

A mayor abundamiento, los acusados Robertson y Marabolí, igualmente dieron cuenta del acuerdo y posterior pago de dinero por parte de la acusada Carolina Ávila. En relación a ello, el primero, en su declaración prestada ante el Juez de Garantía, refirió que escuchó hablar a Carolina con Erasmo, momentos



previos al ingreso a la casa de la víctima, mientras estaban en la camioneta en las cercanías del inmueble; en la que ella le indicó “don Erasmo ud sabe lo que hay que hacer” y luego de concretar el crimen, esperan a Carolina quien va a su casa y regresa con un bolso que le pasa a Erasmo diciéndole “Erasmo cumpla con lo suyo”; luego en horas de la tarde, ve que Marabolí mantenía una mochila con billetes.

A su vez, el sentenciado Marabolí Gutiérrez, en relación al punto antes mencionado, declaró al personal policial que previo al hecho, conversan en la camioneta de Carolina, oportunidad en la que ella les dice “hay que matarlo” y después de cometido el delito, mientras estaban en la plaza de Mariposas, ésta le entrega un bolso de color verde limón a John Robertson el que tenía la suma de \$4.800.000.- no obstante, ella había dicho que mantenía \$5.000.000.-; de ellos, John le pasa parte del dinero. Más tarde se entera que Carolina había ofrecido \$25.000.000.- por darle muerte al padrino; monto que es acorde a la versión que aportó María José Maldonado.

Así las cosas, entienden estos sentenciadores que la persona de la víctima Ulises Leopoldo Valenzuela López, representaba un obstáculo para los intereses económicos de la encausada Ávila Adasme, toda vez que ésta sólo era dueña de la nuda propiedad del terreno que había sido su padrino, quien mantenía un usufructo vitalicio en su favor; siendo el interés de la enjuiciada, consolidar la propiedad plena del predio, cuestión que sólo se concretaría con la muerte del usufructuario. El interés queda de manifiesto, toda vez que, según manifestaron los compradores de parte de los terrenos de la víctima a los investigadores; quedaban hectáreas por enajenar y la intención de la encartada era desprenderse rápido de ellas, cuestión que se confirma con lo dicho por éstos en relación al aviso de venta de terrenos en una red social de la acusada, en la que publicaba “vendo terrenos en sector de Mariposas urgente”; dicho interés queda de manifestó, además, en los mensajes de audios que envió Ávila Adasme al comprador de los lotes, en los que se le escucha decir “que cuando su padrino no estuviera iba a vender más”.

QUINTO: Que, conforme al análisis de las pruebas y fundamentos dados por los sentenciadores, no se percibe una valoración parcial de los medios probatorios, sino que de manera total, conjunta y coherente. En consecuencia, no se divisa vulneración alguna de los principios de la lógica, ni las máximas de la



experiencia. Por el contrario, se constata que se hizo una concatenación de cada una de las probanzas de manera clara y acorde con los medios de prueba y evidencias recopiladas, lo que lleva a una conclusión unívoca e inequívoca respecto de los hechos e intervención que le cupo en los mismos a la enjuiciada.

De lo antes razonado, se colige que las consideraciones y conclusiones del tribunal se realizaron de manera armónica y contextualizada, cumpliendo con la exigencia establecida en el artículo 297 del Código Procesal Penal, pues el sentenciador valoró la prueba y dio cabal cumplimiento al requisito de fundabilidad, dando razón suficiente de su decisión y condena, por lo que es dable concluir que no se ha incurrido en infracción a los principios de la lógica y máximas de la experiencia.

Por último, de los fundamentos expuestos en el arbitrio se desprende que lo que realmente se critica al tribunal, no es una falta de fundamentación en la sentencia recurrida, sino que no se comparte lo decidido por el tribunal, situación que no se condice con un recurso de derecho estricto, como lo es el de nulidad.

SEXTO: Que, previo a entrar en el análisis de la causal impetrada en subsidio de la anterior, es preciso tener en consideración que el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal dispone que procederá la nulidad del juicio y de la sentencia cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del Derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Conforme a ello, dicha causal importa una aceptación de los hechos e impide a esta Corte alterar los que se dieron por establecidos en el fallo impugnado.

De esta forma los hechos que el tribunal tuvo por acreditados en su fundamento noveno, inamovibles para esta Corte, corresponden a los siguientes:

“El día 13 de febrero de 2022, en horas de la tarde, en circunstancias que la víctima ULISES LEOPOLDO VALENZUELA LÓPEZ, se encontraba en su inmueble ubicado en Parcela N°148, sector de Mariposas de la comuna de San Clemente; se dirigieron al lugar premunidos de al menos un cuchillo y vestimentas que dificultara su identificación, los acusados JHON GABRIEL ROBERTSON EARL y ERASMO ENRIQUE MARABOLÍ GUTIÉRREZ con la intención de darle muerte, luego de haber recibido de parte de CAROLINA ANDREA AVILA ADASME, promesa de pago de una suma de varios millones de pesos para quitarle la vida.

Previo a ello, los tres encartados se reunieron en un restaurant ubicado en San Clemente, desde donde se movilizaron hacia el domicilio del ofendido en la camioneta marca Mazda BT-50 de color gris, PPU HHHV-20, vehículo que había sido adquirido días previos por ÁVILA ADASME.



Una vez en el lugar, Robertson Earl y Marabolí Gutiérrez acometieron a la víctima, propinándole diversas estocadas, tales como, una herida cortante en la región anterior del cuello; una herida cortante a nivel de tórax anterior en región pectoral izquierda, una herida cortante sobre el segundo y tercer espacio intercostal izquierdo que perforó la cavidad torácica; una herida cortante compuesta por dos estocadas que confluyen en un mismo punto a nivel del quinto espacio intercostal de la zona pectoral que perforó el tercer arco costal fracturándolo y penetrando en la cavidad torácica, perforando el corazón.

Producto de las lesiones, la víctima resultó con un shock hipovolémico, que le provocó la muerte en el lugar.

Seguidamente, en horas de la mañana del día 14 de febrero de 2022, personal de Brigada de Homicidios de la PDI, debidamente autorizados, ingresaron al domicilio de ROBERTSON EARL, ubicado en pasaje E, casa 50, Villa Francia, comuna de Maule; lugar donde se procedió a su detención; en el registro del automóvil que mantenía estacionado en el inmueble, se encontró la suma de \$1.000.000, en dinero en efectivo.”

Posteriormente, en el fundamento undécimo, calificaron jurídicamente tales hechos, como constitutivos del “delito consumado de homicidio calificado en la persona de Ulises Leopoldo Valenzuela López, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia segunda del Código Penal, toda vez que los encausados Robertson Earl y Marabolí Gutiérrez, quienes luego de haber sido contactados en fecha indeterminada por la encartada Carolina Ávila Adasme, quien les ofreció el pago de una elevada suma de dinero para dar muerte al ofendido; lo agredieron con un arma cortante ocasionándole, entre otras, las lesiones que se han descrito en el motivo precedente, varias de ellas de carácter mortal, pues afectaron el corazón de la víctima, las que le ocasionaron la muerte casi de inmediato”.

Para dar por establecida la calificante de premio o promesa remuneratoria, los sentenciadores fundaron su decisión señalando que se demostró con la prueba rendida en juicio, la intervención, además de los hechores materiales, de un tercero en calidad de mandante, esto es, la persona de la enjuiciada Carolina Andrea Ávila Adasme, quien ofreció el pago de una suma de dinero a cambio de la comisión del crimen.



En efecto, la calificante antes señalada supone necesariamente la intervención, además de los hechores y de la víctima, de un tercero, quien tiene la calidad de mandante, siendo ésta la persona que ofrece un pago o promesa remuneratoria a cambio de la comisión del crimen, de modo que la existencia del premio o promesa, alcanza a todos los co partícipes. Se trata entonces de una calificante que abarca, tanto al que induce a matar como al inducido. Se ha considerado en este punto, lo que expone al efecto Garrido Montt, quien señala: “como el homicidio calificado es una figura independiente, conforme al sistema de participación reglado en nuestra legislación, el autor instigador está induciendo al mercenario, a cometer un homicidio calificado y no un homicidio simple, por lo tanto responde del mismo delito, porque ha intervenido subjetiva y objetivamente en ese tipo penal y no en otro”.

Despejado lo anterior, debe acreditarse que efectivamente existió un vínculo causal directo entre, el premio o promesa ofrecido –de naturaleza económica–, y la muerte de la víctima, de manera que, para acreditar esta circunstancia, en palabras del profesor Mario Garrido: “el inductor debe pagar o prometer el precio para que se mate y el que realiza la acción hacerlo precisamente para recibirlo”.

SEPTIMO: Que, al parecer de estos sentenciadores, en los hechos que se dieron por establecidos en la sentencia recurrida, concurren todos los elementos del tipo penal que se dio por configurado en dicho fallo, esto es, el delito consumado de homicidio calificado en la persona de Ulises Leopoldo Valenzuela López, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia segunda del Código Penal, toda vez que los autores materiales del hecho, lo ejecutaron a petición de la enjuiciada Carolina Ávila Adasme, en razón del dinero que les ofreció para darle muerte. En estas circunstancias, aquéllos concurrieron al domicilio del ofendido y lo agredieron con un arma cortante ocasionándole, las lesiones establecidas en el fundamento octavo de la sentencia recurrida, que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar.

En cuanto a la infracción de ley que se reclama, ha de tenerse en consideración que el artículo 63 del Código Penal, estatuye lo siguiente:

“No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo.



Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse”.

A su vez, el artículo 15 N°2 del mismo código, dispone que se consideran autores: *“2.° Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo”.*

En este contexto, la determinación de la naturaleza de la autoría que se atribuye a la enjuiciada recurrente, esto es, la de autora inductora, en ningún caso constituye una circunstancia agravante, de manera que al determinar que se configura a su respecto el tipo penal de homicidio calificado por la circunstancia segunda del artículo 391 N°1 del Código Punitivo, no se ha vulnerado el principio non bis in ídem que consagra el artículo 63 del Código Penal, antes transcrito. En efecto, en ningún caso se ha considerado una misma circunstancia agravante inherente al delito, para su configuración.

Además, esta Corte comparte lo resuelto por el tribunal a quo en orden a que al autor instigador responde por el delito que induce a cometer que, en la especie, constituye un homicidio calificado, puesto que ha intervenido objetiva y subjetivamente en ese ilícito y no en otro, como lo sostiene el profesor Garrido Montt, citado en el fallo que se impugna por esta vía.

Esa es la doctrina predominante en esta materia, así se pronuncian Grisolía, Bustos y Politoff, pues sostienen que *“el inductor que se sirve del cebo pecuniario es más que un instigador; a fin de cuentas, tiene el completo dominio del hecho y en este sentido es un verdadero autor. De este modo, puede sostenerse que el mandante por cuya cuenta se perpetra un homicidio es considerado autor (instigador) del mismo. Pero si se sirve del poder corruptor del precio, apoderándose de la libertad del sirviente, se hace autor de homicidio calificado (inductor)”*, (Derecho Penal, parte especial, 1993, página 122). Por lo tanto, el autor inductor comparte la subjetividad de la circunstancia calificante del artículo 391 N°1, circunstancia segunda, del Código Penal.

Mismo parecer tienen don Vivian Bullemore G. y John MacKinnon R., al señalar que esta calificante *“opera tanto respecto del mandante como del mandatario. El hecho de que en la calificante se utilice la expresión “por” en lugar de la voz “mediante”, empleada en la agravante genérica, no tiene por qué llevar a la conclusión de que la calificante se restringe sólo al mandatario. No hay razones de justicia objetivas para tal restricción”*; Curso de derecho Penal, Tomo III, Parte especial, quinta edición, año 2021. Páginas 46 y 47.



De igual forma, se sostiene por los profesores Jean Pierre Matus Acuña y María Cecilia Ramírez Guzmán, al indicar que *“lleva razón nuestra doctrina mayoritaria cuando ve en el homicidio calificado por premio o recompensa una suerte de delito de participación necesaria, donde debe existir mandante y mandatario, ambos plenamente responsables”*. Además, se refieren a la naturaleza de la autoría de mandante y mandatario, señalando que, incluso, *“la doctrina criminal estima que ambos toman parte en la ejecución del delito, y serían, por tanto, coautores del mismo, según el Art. 15 N°1. Esto significa, además, que el comienzo de la ejecución del asesinato podría establecerse al menos desde el momento en que se ofrece el encargo criminal o se plantea la promesa del premio en caso de su aceptación”*. Manual de Derecho Penal Chileno, Parte Especial, año 2016.

Por último, cabe señalar que el profesor Enrique Cury Urzúa, sostiene que *“La pena contemplada por la ley para el inductor es la misma establecida para los autores, a los cuales el artículo 15 los asimila precisamente con ese propósito.”* Haciéndose cargo de la crítica de Jackobs respecto al distanciamiento del inductor respecto de la perpetración del hecho y su dominio del mismo, señala que *“...a pesar de ese alejamiento, no ha de olvidarse que, a fin de cuentas, el instigador es quien da el “impulso decisivo” al delito y, en muchos casos, su comportamiento puede incluso merecer una pena más severa que la del autor.”*. Derecho Penal, Parte General, 2005.

OCTAVO: Que, de esta forma, es posible concluir que los sentenciadores, no se han apartado en modo alguno de los hechos y que la calificación jurídica que han efectuado se corresponde con los mismos.

En consecuencia, no se ha incurrido en la errónea aplicación del derecho que se reclama, compartiendo esta Corte los fundamentos de tal decisión, por lo que procede rechazar la causal de nulidad en que se sustenta este capítulo del recurso de nulidad deducido por la defensa.

NOVENO: Que, en armonía con lo razonado en las motivaciones que preceden, corresponde desestimar el recurso interpuesto y concluir que la sentencia impugnada no es nula.

Por las anteriores consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo prevenido en los artículos 352, 358, 360, 372, 373 letra b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad interpuesto por el Defensor Penal Público don Sebastián Carrazana Gálvez, en



representación de la sentenciada Carolina Andrea Ávila Gutiérrez en contra del fallo definitivo pronunciado por el Tribunal de Juicio Oral de Talca el día 7 de octubre de 2023, en causa RIT N°88-2023 y, en consecuencia, se declara que dicha sentencia no es nula.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Redacción de la Ministra Titular doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol N°1945-2023 Penal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PKDCXLTCFND

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Presidente Blanca Rojas A. y los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C., Jeannette Scarlett Valdés S. Talca, doce de enero de dos mil veinticuatro.

En Talca, a doce de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PKDCXLTCFND